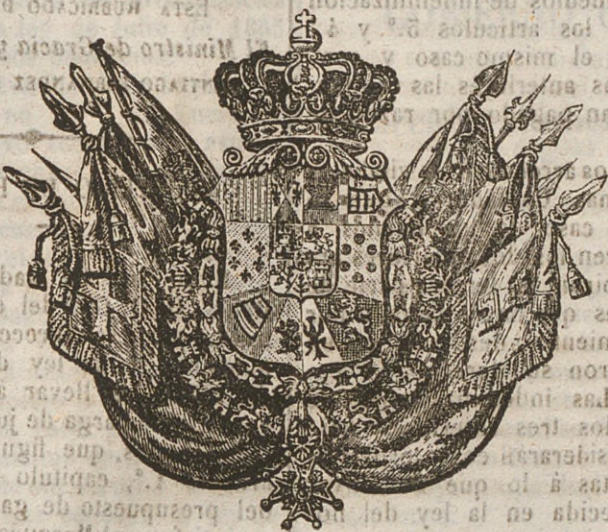


# BOLETIN OFICIAL



## DE LA PROVINCIA DE ALBACETE.

Este periódico se publica los lunes, miércoles y viernes.—Los suscritores de esta Capital pagarán 6 rs., al mes, y 8 los de fuera, franco el porte.

Los anuncios particulares que se quieran insertar en el *Boletín*, previa licencia del Sr. Gobernador, pagarán medio real por línea.

### PARTE OFICIAL

#### SECCION DE LA GACETA

#### MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

El Presidente del Consejo de Ministros al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia: «San Ildefonso 24 de Agosto de 1861.—SS. MM. y AA. continúan sin novedad en su importante salud.»

#### EXPOSICION A S. M.

#### SEÑORA:

En cumplimiento de la ley de 8 de Febrero de este año deberán cesar en breve en el desempeño de sus cargos los actuales Contadores de hipotecas; y como el Gobierno ha reconocido y reconoce el derecho de algunos de ellos a ser previamente y en cuanto sea posible indemnizados, no puede menos de acudir a V. M. proponiéndole las reglas que por ahora podrán servir de norma a esta indemnización. Bien quisiera el Ministro que suscribe proponer desde luego a V. M. una resolución completa y definitiva en asunto tan difícil; pero considerándose sin facultades para hacerlo, por ser este punto de la competencia del poder legislativo, y creyéndose por otra parte obligado a ofrecer alguna compensación, siquiera sea interina, a los intereses y derechos perjudicados por la reforma hipotecaria, somete a V. M. los medios que en su concepto podrían emplearse para satisfacer, hasta donde sea posible la necesidad de llevar a efecto la ley de 8 de Febrero, y la de no traspasar los límites de la competencia del Gobierno.

Al fijar la ley hipotecaria las condiciones que deben concurrir en los registradores, y la manera de proceder a su nombramiento, declaró implícitamente consumidos los oficios de Contadores de hipotecas enajenados de la Corona, y privados, por lo tanto, sus

poseedores de los derechos que por tales enajenaciones adquirieran. La justicia y la equidad exigen que los desposeídos sean indemnizados; pero ni la ley de 8 de Febrero determinó la manera de hacerlo, ni tampoco es aplicable al caso la ley vigente de expropiaciones por causa de utilidad pública, que solo comprende en su letra y espíritu a los propietarios particulares, dueños de bienes privados, y de ningún modo a las clases del Estado por sus intereses ó derechos colectivos, que no pueden ser objeto de cuestiones contenciosas. Se necesita, pues, una ley que provea definitivamente a la indemnización de los Contadores, cuyos oficios se consumen para establecer en su lugar registros de la propiedad; y siendo estos oficios por su naturaleza semejantes a los de la fe pública enajenados de la Corona que han de revertir al Estado, indemnizándose a sus dueños con arreglo a la ley, cuyo proyecto aprobado ya por el Senado, pende de aprobación del Congreso, parece forzoso que sea también una ley la que fije de un modo análogo la indemnización definitiva de los poseedores de Contadurías por título oneroso.

Peró como la reversion al Estado de estos oficios ha de preceder a la publicación y ejecución de la ley del notariado, si la hipotecaria ha de llevarse a efecto en el plazo legal, la justicia exige que los desposeídos reciban en el momento de serlo alguna recompensa por el sacrificio que el interés general del Estado les impone. Por fortuna son muy pocos los que se hallan en esta dolorosa necesidad. La mayor parte de los actuales Contadores de hipotecas lo son a título de Escribanos numerarios más antiguos de las respectivas cabezas de partido: con arreglo a la Real orden de 17 de Octubre de 1836 fueron nombrados por las Audiencias interin se proveya lo conveniente en la reforma general del ramo, y ningún desembolso ni anticipo hicieron que les dé hoy derecho a alguna indemnización. Pero V. M. está satisfecha de sus servicios, y no sería justo despedirlos sin alguna muestra del Real aprecio, que premiando en cierto modo su buen comportamiento, pueda contribuir a los adelantos de su carrera. No se hallan en el mismo caso

unos pocos Contadores que adquirieron sus oficios por juro de heredad y enajenación perpétua de la Corona, por compra vitalicia ó por arrendamiento con la misma calidad. Todos estos tienen incontestable derecho a ser indemnizados; pero no concurrendo en todos las mismas circunstancias, se les pueden ofrecer, según estas sean, distintos medios de indemnización. Si hay algunos que tengan las condiciones necesarias para ser registradores, ninguna reparación más adecuada, si ellos renuncian a su derecho, que el nombramiento de tales registradores de los mismos partidos en que desempeñan hoy su cargo, si bien quedando en un todo sujetos a las prescripciones de la nueva ley. Si hubiere otros Contadores que fueren ó estuvieren en aptitud de ser Escribanos, y quisieren cambiar los oficios que hoy poseen por otros de la fe pública vacantes y de necesaria provisión, renunciando también a su derecho, V. M. podría nombrarles vitaliciamente para tales oficios en cualesquiera partidos judiciales, con lo cual ellos mejorarían tal vez de condición, y el Estado no haría para ello ningún sacrificio. Los que optaran por cualquiera de estos medios de reparación se deberían considerar definitivamente indemnizados, puesto que renunciando libremente a su derecho, no se necesitará una medida legislativa para que quede legítimamente consumada la expropiación.

Peró habrá otros poseedores de Contadurías que, no pudiendo ó no queriendo optar por los medios de indemnización indicados, deban recibir otra diferente, ya provisional ó ya definitiva en su día. Si hubiera de apreciarse rigurosamente el valor relativo de los derechos de que han de ser privados estos poseedores, se hallarían entre ellos diferencias muy considerables. Los que en época remota adquirieron del Estado el dominio absoluto de sus oficios, pierden mas sin duda que los que en tiempos recientes adquirieron tan solo el dominio vitalicio de los mismos: los que adquirieron por compra poseen sin duda por un título más sagrado y digno de respeto que los meros arrendatarios, aunque sus arrendamientos sean vitalicios, dado que nuestras leyes declaran extinguido este contrato cuando desaparece la cosa que es objeto del mismo,

aunque sea por la voluntad del dueño; pero así como no sería posible valuar exactamente cada derecho perjudicado, á fin de que la indemnización fuese siempre rigurosamente proporcionada, así no sería justo prescindir por completo de la diversa naturaleza de los derechos indemnizables.

Todavía deben tenerse en cuenta otras consideraciones para fijar ahora el tanto de la indemnización. Habiendo de ser esta provisional, y quedando sujeta a lo que se decida definitivamente por una ley, no puede olvidarse que el proyecto de la de notariado, que ha merecido ya la aprobación de uno de los Cuerpos Colegisladores, ofrece indemnizar a los propietarios de Escribanías, devolviéndoles el precio de la egresión y el del valimiento en su caso. En tal supuesto, no sería justo ni prudente ofrecer mayor indemnización a los dueños de Contadurías. No sería justo, porque en ningún caso pueden tener mejor derecho los Contadores que los Escribanos: no sería prudente porque se daría lugar a graves dificultades y compromisos, dando, como indemnización provisional, mayor suma que la que probablemente se pudiera conceder como definitiva.

Por estas razones el Ministro que suscribe se limita a proponer a V. M. una indemnización tal que siendo capaz de aumento, si el poder legislativo lo acuerda así, no tenga probabilidad de ser rebajada en la ley que habrá de dictarse sobre este asunto. A los dueños de Contadurías por juro de heredad debe ofrecerse, pues, lo mismo que, a los propietarios de oficios de la fe pública por igual título, se proyecta conceder en la ley del Notariado, esto es, el precio de la egresión y el del valimiento en su caso. A los dueños vitalicios de las mismas Contadurías, quizá para igualarlos respectivamente con los anteriores, no se debiera ofrecer la misma indemnización; pero atendida la dificultad de apreciar las diferencias que existen entre unos y otros, convendría más prescindir de ellas, y devolverles, como a los propietarios perpetuos, el precio íntegro que dieron por su adquisición. A los nuevos arrendatarios que, como se ha dicho, poseen por un título menos respetable, y cuyo derecho tal vez





